



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN: 249/2024 y

MATERIA: PENAL

QUEJOSO Y RECURRENTE:

MAGISTRADO PONENTE:

JORGE MASON CAL Y MAYOR

SECRETARIO:

SALOMÓN ZENTENO URBINA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de **treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.**

VISTOS; los autos para resolver el amparo en revisión penal **249/2024**, relativo al juicio de amparo indirecto ***** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez; y,

RESULTANDO

PRIMERO. PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, a través del buzón judicial, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ***** , por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes:

III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. *Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en la controversia *****.*

EJECUTORAS:

4. Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México.

6. *Director General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México.*

IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS: DE LAS

DE LAS EJECUTORAS reclamo el desacato a la
 inación judicial emitida por el Juez responsable, en la
 versia *****, promovida por el aquí quejoso.



[...]"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. Correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, quien por acuerdo de uno de abril de dos mil veinticuatro, la admitió con el expediente *****; negó la suspensión de plano solicitada; tuvo por no designadas a las autoridades ejecutoras Comisionado Nacional de Seguridad, Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y Director General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, todas con residencia en Ciudad de México, toda vez que las citadas no fueron señaladas como autoridades dentro de la controversia reclamada; asimismo, dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y requirió a las autoridades responsables el informe justificado.

Seguido el procedimiento, el **trece de mayo de dos mil veinticuatro** el juez de distrito celebró la audiencia constitucional y emitió la sentencia respectiva, en la que resolvió **negar** la protección de la justicia federal solicitada.

TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso ***** al momento de su notificación el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, interpuso recurso de revisión, que fue turnado a este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y

En acuerdo de dos de julio posterior, se tuvo al defensor público del quejoso formulando agravios en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto.

QUINTO. SUSPENSIÓN DE LABORES. Es importante destacar que, en el periodo comprendido entre el diecinueve de agosto y seis de noviembre de dos mil veinticuatro no corrieron plazos y términos, por haberse declarado inhábiles, al actualizarse una causa de fuerza mayor, por subsistir la decisión de la base trabajadora de continuar con la suspensión de labores; esto, en términos de las circulares 16/224, 17/2024, 19/2024, 20/2024, 22/2024 y 23/2024, emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal y de los distintos Avisos suscritos por las Coordinaciones de las Magistraturas de los Tribunales Colegiados y de Apelación, de las personas titulares de los Juzgados de Distrito y del Centro de Justicia Penal Federal y de las personas juzgadoras de los Tribunales Laborales Federales en Asuntos Individuales, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa de Figueroa y Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas.

OCTAVO. VISTA A LAS PARTES RESPECTO DE LA NUEVA INTEGRACIÓN DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Por oficio digital SEADS/3290/2024, de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó la **readscripción** a este tribunal colegiado de la **Magistrada Minerva López Constantino**, a partir del dieciséis de septiembre del citado año, surtiendo efectos su incorporación a este órgano jurisdiccional cuando concluyera su comisión en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00

CONSIDERANDO

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. El recurso de revisión hecho valer fue interpuesto dentro del término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente:

a) La sentencia recurrida se notificó personalmente al recurrente el **diecisisete de mayo de dos mil veinticuatro**.



b) La notificación surtió sus efectos el **veinte de mayo siguiente**, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo¹.

c) El plazo de diez días para impugnar la resolución recurrida transcurrió del **veintiuno de mayo al tres de junio del año anterior.**

d) De dicho plazo deben descontarse el **veinticinco y veintiseís de mayo, uno y dos de junio**, por ser sábado y domingo, respectivamente, e inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

e) El recurso de revisión se interpuso el **diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro**; esto es, al momento de la notificación de la resolución recurrida; por tanto, fue oportuno; incluso antes de que comenzara a correr el plazo legal de diez días señalado para tal efecto.

TERCERO. CONSIDERACIÓN PREVIA. En la siguiente ejecutoria se realizará la cita de diversos criterios aislados y jurisprudenciales en los que se interpreta la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido no se opone a la legislación de amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; ya que en tales tesis se interpretan disposiciones jurídicas que son de similar contenido. Por tanto, su invocación no se contrapone con el cuerpo normativo actual.

CUARTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y AGRAVIOS. La resolución que

Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:
(...)

II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente: v. (...)”

En ese contexto, la falta de transcripción de ambos aspectos citados no deja en estado de indefensión a las partes, visto que al resolver la controversia planteada, el tribunal debe efectuar el examen de los fundamentos y motivos en los que se sustenta la resolución impugnada conforme con los preceptos constitucionales y legales aplicables pero, en relación con los motivos de inconformidad, a menos de que se surta la suplencia de la queja deficiente.

Tiene aplicación la tesis aislada XVII.1º.C.T.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena

Y la omisión en el cumplimiento a dicha resolución el quejoso se la reclama a la autoridad responsable ejecutora Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 “CPS Chiapas”; advirtiéndose que en la sentencia recurrida, el juzgado federal niega al quejoso la protección constitucional solicitada respecto del acto impugnado a dicha autoridad.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00



Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 262, registro digital 181325, de rubro y texto siguientes:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECORRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE.

Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento”.

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley”.

$$(\dots)$$

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos reclamados provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.



Por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.

Es aplicable la tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, que dispone:

“AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: **"AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.** El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00



o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades”.

Por tanto, para distinguir a una autoridad de un particular, para efectos del juicio de amparo, destacan las notas siguientes:

- a) La existencia de un ente, ya sea de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con el propio particular.
- b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; por lo que, dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
- c) Con motivo de tal relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.
- d) El ente no requiera, para la emisión de esos actos, acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro digital 161133, de rubro y texto siguientes:

Ahora bien, los numerales 120 al 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente:

El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental”.

En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia:



- I. La persona privada de la libertad;*
- II. El defensor público o privado;*
- III. El Ministerio Público;*
- IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente;*
- V. El promovente de la acción o recurso, y*
- VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia.*

Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño.

Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario”.

“Artículo 122. Formulación de la controversia

La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital.

El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto”.

“Artículo 123. Auto de inicio

Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de

- I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento;*
- II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o*
- III. Desechar por ser notoriamente improcedente.*

El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud.

“Artículo 124. Sustanciación

En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00



hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días.

En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio.

En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia”.

“Artículo 125. Reglas de la audiencia

Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio.

Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código”.

“Artículo 126. Desarrollo de la audiencia

La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes:

1. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma;

II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber:

III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes;

IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento;

V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código;

VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y

“Artículo 127. Resolución

En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados”.

Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes”.

La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme.

Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de



Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto.

Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución.

Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan.

Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento.

Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes”.

De los preceptos antes transcritos se advierte la naturaleza y tramitación del procedimiento relacionado con la controversia judicial instada ante el Juez de Ejecución.

Así, en primer término, se evidencia que del numeral 121 de la legislación antes invocada, se desprende que en dicha controversia pueden fungir como partes procesales, las siguientes:

- 1) La persona privada de la libertad;
- 2) El defensor público o privado;

- Una vez substanciado el procedimiento, se prevé que el Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final; en la que, incluso de oficio, se pronunciará sobre

Y finalmente, se establece que cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes.

Ahora bien, cabe traer a colación lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/2019, en donde apuntó lo siguiente:

$$(\dots)$$

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00



se tiene la certeza y plena convicción de que aquélla se actualiza en el caso concreto; o sea, cuando sea evidente, claro, fehaciente e indiscutible. (19)

67. Cabe señalar, que esa potestad del juzgador no es ilimitada, ni depende de su criterio subjetivo, sino que para ello, conforme al texto del artículo 62 de la Ley de Amparo,(20) debe analizar oficiosamente si en el caso que se le presenta se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el diverso numeral 61 de la ley de la materia, o alguna otra que resulte de algún precepto de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo, en términos de lo ordenado por la fracción XXIII del citado numeral 61.(21)

68. Conforme a lo anterior, cuando el reclamo en una demanda de amparo versa sobre la determinación en la que como parte de una misma unidad, los agentes del Ministerio Público niegan al imputado la petición de reducción de la pena mínima, en los términos señalados en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso, corresponde al Juez desechar la demanda de amparo, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la misma, porque no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

69. En efecto, con apoyo en lo expuesto en el apartado anterior, es notorio, manifiesto e indudable que los actos reclamados a los agentes del Ministerio Público, en los que niegan reducir la pena mínima prevista para el delito imputado, mediante la solicitud de terminación anticipada del proceso a través del procedimiento abreviado, no tiene naturaleza de acto de autoridad, sino que el o los actos emitidos por los referidos fiscales son, en todo caso, en calidad de sujeto-parte del proceso penal acusatorio y oral, más no como autoridad instructora del proceso.

70. Por ende, el Juez de amparo debe aplicar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo.⁽²²⁾ la cual establece que el juicio de amparo

71. Ciertamente, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la decisión del agente ministerial que niega al imputado la solicitud de reducir la pena mínima relativa para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través del procedimiento abreviado, se actualiza la causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable; porque, como quedó expuesto, no puede ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que quien lo emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como tal; particularmente, porque el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; pero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez de Control, mientras que el Ministerio Público actúa como parte en los términos referidos.

73. De ahí que, la negativa de los agentes del Ministerio Público para reducir la pena mínima prevista para el delito por el que se le vinculó a proceso al imputado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de control constitucional, porque en sí es un acto que deriva de un acuerdo entre representante social y el imputado, auxiliado de su defensa, pública o particular; tan es así que éste tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado y, adicionalmente, el Juez de Control debe verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su procedencia y que no se vulneren los derechos humanos de las partes.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00

Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00



fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo”.

Ahora bien, tal como ya quedó precisado la controversia judicial ***** , del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, la promovió ***** ***** ***** ***** , acá quejoso, en contra de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS Chiapas”, a quien le reclamó la omisión de gestionar que se le brinde la atención médica que necesita como interno; controversia que se declaró fundada en favor del peticionario (resolución que obra a fojas 62 y 63 de las copias certificadas del expediente ***** , que fue enviado por el juzgador responsable como prueba en su informe justificado), señalándose en dicha resolución que la autoridad administrativa demandada, debía realizar lo siguiente:

“[...]

Han transcurrido ocho meses desde la cancelación de la intervención quirúrgica y la autoridad no ha sido omisa en cumplir con esa determinación médica, siendo que la situación del interno puede agravarse.

Por lo anterior, la Directora del Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”, con residencia en Villa Comaltitlán, deberá:

- Además, en sus numerales 124, 127, 128 y 129, se prevé un procedimiento específico para dar ejecución a la determinación emitida dentro de una controversia judicial, donde incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento, a través de los medios de apremio que procedan, e incluso, a través del requerimiento del superior jerárquico de la autoridad penitenciaria.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a66320000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00



sólo será autoridad responsable, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente a los particulares y no de coordinación ante éstos, pues únicamente desde la primera posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia”.

En otro aspecto, en la demanda de amparo el quejoso también señaló como autoridad responsable ordenadora al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; sin embargo, al antes citado no le asiste el carácter de autoridad responsable, porque no intervino en la tramitación y resolución de la controversia judicial *****, de donde deriva el acto omisivo reclamado; ya que del análisis al citado expediente, se advierte que el quince de marzo de dos mil veintitrés, ***** en su carácter de administrador del citado Centro de Justicia señaló lo siguiente:

“Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de marzo de dos mil veintitrés.

Agreguese el oficio procedente de esta administración,
registrado con el número de promoción 5830, mediante el cual
ordena radicar controversia respecto de la PPL *****
***** , en relación al tópico: Atención en su hombro, se
acuerda:

(...)

Con fundamento en los artículos 122 párrafo segundo y 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, turnese el presente expediente al Juez de Distrito en funciones de Ejecución adscrito a este Centro de Justicia Penal Federal *****

***** para que se pronuncie al respecto.

Así lo proveyó y firma Arturo Vidal López, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez”.

Por tanto, es evidente que el citado Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, no tuvo una intervención en la tramitación y resolución de la controversia judicial, sino que su participación fue sólo la de remitir la controversia promovida al órgano jurisdiccional competente para resolver.

De manera que, si como ya se expuso en términos de lo establecido en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; entonces, es evidente que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, no le asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional; por lo que, el amparo promovido en su contra es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II (aplicada sentido contrario), de la citada legislación.



Ahora, resulta importante puntualizar que la declaratoria de improcedencia del juicio de amparo respecto de las dos autoridades señaladas como responsables a las que se ha hecho referencia, no significa que se le esté restringiendo al quejoso el derecho de ejercer su acción de amparo; ya que como en todo juicio, para poder analizar la litis es condición necesaria que se cumplan con los requisitos de procedibilidad previstos en la ley, lo que en el caso no sucedió tal como ya quedó expuesto.

Es aplicable la tesis aislada 2a. XCI/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 22, septiembre de 2015, Tomo I , página 690, registro digital 2009938, de rubro y texto siguientes:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la

En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en relación con el acto reclamado a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS Chiapas” con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas; al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II (interpretado en sentido contrario), de la Ley de Amparo.

Lo anterior, sin que se considere necesario dar vista al quejoso en términos del numeral 64 de la ley de la materia; toda vez que, como a continuación se evidenciará, en el presente fallo, el quejoso obtendrá la concesión del amparo, precisamente para que el Juez responsable proceda a cumplimentar de inmediato la resolución de la controversia ***** [resuelta a su favor]; por lo que, la vista respecto a la improcedencia advertida, sólo retardaría la pretensión del impetrante del amparo, generando un perjuicio en su esfera jurídica.

Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 53/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en al *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1191, registro digital 2011696, que dispone:

Como ya quedó precisado, el quejoso ***** , promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; de quien le reclama, en su carácter de autoridad ordenadora, la omisión en que incurrió de no requerir a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS Chiapas”, que cumpla debidamente con la resolución dictada en la controversia judicial ***** , tramitada conforme lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, resuelta por dicho juzgador en favor del peticionario, así como la omisión de imponer multas a la autoridad penitenciaria por no acatar dicho fallo.

Ahora bien, es de suma importancia establecer que en contra de la omisión reclamada por la parte quejosa, en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, esa legislación no prevé un mecanismo originario de impugnación que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo.

Lo anterior es así, porque el numeral 129 de la mencionada legislación establece lo siguiente:

“Artículo 129. Ejecución de la resolución

La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme.

Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de

a) Cumplimiento sin objeción del interesado.

b) Cumplimiento con inconformidad del interesado.

c) Cumplimiento parcial o de imposible cumplimiento.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a66320000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00

“Recursos

I. Desechamiento de la solicitud:



II. Modificación o extinción de penas;

III. Sustitución de la pena:

IV. Medidas de seguridad;

V. Reparación del daño;

VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias:

VII. Traslados;

VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y

IX. Las demás previstas en esta Ley”.

Con base en lo expuesto se estima que, previo a promover el juicio de amparo materia de esta revisión, el quejoso no estaba obligado de agotar algún medio ordinario de defensa para combatir el acto de omisión reclamado.

Ahora bien, en el fallo recurrido el juzgado de distrito resolvió negar el amparo promovido en contra del acto de omisión que el quejoso le reclamó al juez responsable, al considerarse que ni dicha autoridad ordenadora ni la autoridad penitenciaria demandada, no han incurrido en la omisión que impugna el peticionario, por las razones que enseguida se transcriben:

“

Conforme a lo narrado anteriormente, se desprende que contrario a lo que aduce el quejoso, el Centro de Justicia Penal Federal ha efectuado los requerimientos a la autoridad demandada en la controversia *********, a fin de dar cumplimiento a la resolución ahí dictada y ésta ha demostrado hacer las gestiones correspondientes ante el Hospital General de Huixtla, quien le brinda el servicio de la especialidad requerida; tal como lo establece el reglamento descrito, al no contar dicho centro penitenciario con personal para ese tipo de eventualidades.

Pero el hecho de que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, así como en su tramitación, no se haya

Para sostener esa postura, primeramente, es necesario aludir al contenido del derecho de acceso a la justicia, contemplado en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, o autoridades de naturaleza administrativa a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la acción o excepción que plantee y, en su caso, se ejecute tal decisión.

En efecto, para considerar que el actuar de una autoridad ha configurado una abierta dilación debe atenderse al derecho fundamental al plazo razonable, como parte del debido proceso, concebido como aquel retardo que muestra que la tramitación de un procedimiento se ha prolongado de forma que su desarrollo sea superior al previsto por la norma, lo que implica que para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un procedimiento, debe tomarse en cuenta:

- JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a663200000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00

Por tal motivo, la concurrencia de esas particularidades configura por sí misma, complejidad material para el cumplimiento a una resolución, dado que se insiste, la disponibilidad en el cupo de dicho nosocomio no depende únicamente de la autoridad penitenciaria, sino de los múltiples trámites que además se deben efectuar para allegar al hospital general de los insumos necesarios para la intervención quirúrgica, lo cual depende de sus superiores jerárquicos, así como de su existencia y asequibilidad

Por lo que hace a los factores sintetizados en el inciso b), debe hacerse mención que en párrafos que preceden, se hizo una reseña de las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, para dar cumplimiento a la resolución que nos ocupa, llegando a considerar que el centro penitenciario ha efectuado lo necesario para llevar a cabo la cirugía de que se habla.

Sin que pase inadvertido que, en esta data, la autoridad judicial no haya emitido pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento o incumplimiento dado a la multicitada resolución.

Se dice lo anterior, porque es un hecho conocido para este juzgador que, los asuntos en materia de ejecución representan más del ochenta por ciento de la carga de trabajo del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, situación que llevó a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a aprobar el auxilio temporal de los juzgadores adscritos al centro de justicia penal federal con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, durante el periodo comprendido del uno de febrero al treinta de abril del año que transcurre, con la finalidad de enfrentar las cargas laborales de una

No se desconoce que el juzgado responsable ha llevado a cabo diversos requerimientos a la autoridad penitenciaria respectiva, para que cumpla con la resolución dictada en la controversia judicial, relativa a que se le proporcione la atención médica que requiere el quejoso; y que el órgano penitenciario también ha hecho gestiones ante el hospital correspondiente para que se le brinde la atención al peticionario, tal como se advierte de la relatoría de hechos que se efectuó en la sentencia recurrida y que aquí se inserta:

1.- En audiencia de tres de julio de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, dictó resolución definitiva que declaró fundada la controversia ***** , promovida por el aquí quejoso ***** ***** ***** ***** ...

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
706a6620636a66320000000000000000124f5
15/05/26 18:00:00

”

• • • •

Ahora, si bien con lo anterior se pone de manifiesto que la autoridad penitenciaria ha gestionado los trámites para que el mencionado hospital atendiera al quejoso y programara su cirugía; sin embargo, ello sólo revela un cumplimiento parcial de la resolución emitida en la controversia judicial, porque como ya se dijo, a la fecha de promoción del juicio constitucional no se le ha practicado al inconforme la intervención quirúrgica, siendo que esto fue el aspecto para el cual se declaró fundada dicha controversia, cuya parte conducente ya quedó transcrita, en el que se estableció que debían hacerse todas las gestiones necesarias para que se le realizara la intervención quirúrgica de hombro que le fue

Sobre todo, tomando en cuenta que es un hecho notorio de conocimiento común que si un problema de salud no se atiende a su debido tiempo, pueden generarse secuelas irreparables que ponen en riesgo el adecuado funcionamiento del organismo o incluso su vida.

Ello es sí, porque la omisión de proporcionar una adecuada, oportuna y diligente atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado de proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que se le prescribió para el control de la enfermedad que padece. Ante la urgencia por la falta de suministro del medicamento prescrito y para no poner en riesgo su salud, el paciente lo adquirió por cuenta propia. Por ello, solicitó el reembolso de los gastos generados por la compra del medicamento, lo cual hizo del conocimiento de las autoridades responsables y del Juez de Distrito, quien sobreseyó en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Contra esta determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención al derecho humano a la salud, al no satisfacerse lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben reembolsarse al quejoso los gastos erogados con motivo de la adquisición del medicamento requerido para tratar su enfermedad, pues al actualizarse la interrupción del suministro del fármaco, así como su entrega tardía, se vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro de los cuales –tratándose de servicios de salud– se encuentran las acciones

“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados

Máxime que, en términos de lo establecido en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando la autoridad penitenciaria responsable del centro de reclusión no cumpliera dentro del plazo establecido con el fallo dictado en la controversia judicial, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos para su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes.

Consecuentemente, procede **revocar la sentencia recurrida** y a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para los efectos siguientes:



- A partir de lo establecido en esta ejecutoria y con apoyo en las facultades que le confiere el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, incluso, de ser necesario recurriendo a la aplicación de los medios de apremio que estime legalmente pertinentes, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, deberá requerir de inmediato a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS Chiapas”, con residencia en Villa Comaltitlán, para que proceda a dar cumplimiento de manera inmediata con la resolución emitida en la controversia judicial *********, relativa a que se le brinde la atención quirúrgica que requiere el peticionario.

- De ser necesario y con las facultades que le confiere el precepto 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el juez de ejecución responsable deberá requerir a las autoridades superiores jerárquicas de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS Chiapas”, con residencia en Villa Comaltitlán, para que por su conducto se gestione el inmediato cumplimiento a la resolución dictada en la controversia judicial ***** , para los fines antes señalados.

Y para el caso de que en el hospital donde se le programó la cirugía al quejoso, no existan las condiciones para que a la brevedad se le realice dicha intervención quirúrgica; entonces, en ese supuesto el Juez de ejecución responsable, así como la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 “CPS Chiapas”, con residencia en Villa Comaltitlán y también las autoridades penitenciarias superiores

Todo lo anterior deberá realizarse tomando las medidas de seguridad que sean necesarias durante el traslado y estancia del quejoso al centro médico donde deba ser atendido.

Respetuosamente no se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al resolver en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, el amparo en revisión en materia penal *****; como tampoco se comparte la decisión emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de queja en materia penal ***** , en sesión de siete de noviembre del año antes citado.

Lo anterior es así, porque los dos tribunales colegiados que se mencionan, en los referidos recursos en cita, establecieron que es improcedente el juicio de amparo

Por lo expuesto y fundado, se

PRIMERO. Se **REVOCA** la sentencia recurrida.

TERCERO. Con base en lo expuesto en el considerando **séptimo** de esta sentencia, la justicia de la unión **AMPARA Y PROTEGE** a ***** ***** ***** *****

Firman electrónicamente el Magistrado Presidente y la Magistrada, con el Secretario de Tribunal en funciones de Magistrado de Circuito, que integran este órgano jurisdiccional, ante José Alejandro González Interiano, Secretario de Acuerdos que da fe.

El suscrito Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, hago constar y certifico: Que el presente asunto se aprobó el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco; y la sentencia se terminó de engrosar en la misma data. Doy fe.

JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO
(FIRMA ELECTRÓNICA)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

105537381_1536000035683924009.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE					
Nombre:	JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ INTERIANO		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.24.f5		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:28:16 - 31/03/25 15:28:16		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256				
Cadena de firma:	43 7d ef 5f 71 b2 ae 7e 5d 80 a3 da 68 47 b2 e1 bf 7f 9b 94 14 59 5b c8 16 b3 9c fb 31 3d b6 85 9a 69 9e e4 2e b7 1a cd 31 e0 74 8f 37 f8 a0 52 6c bf b7 eb 1c ec 8b d6 f2 1f 85 44 98 77 71 65 e0 8a f3 09 be 62 76 2a f3 76 93 47 ca 29 a5 c3 42 f3 73 9d 47 6b eb ac f2 55 ad 04 09 ad b7 ee 7a 70 5e cb 15 1a 0c cd c3 f9 57 09 97 1b a0 38 7e 87 66 ab 40 18 4c af 6e 0a 7a 9b fa 2e 47 25 47 73 08 2e 84 da 53 31 ea 94 e5 e7 90 24 8a 5f 99 d4 51 46 c7 76 00 a6 c6 b9 6b 15 2f 93 d0 d2 b5 c7 b3 9f e3 c6 a9 cc 31 f4 94 dc d2 f2 31 ce a6 72 1a 8c 37 58 a8 57 bb 7c eb 68 ea d6 f3 20 07 f1 82 ec 84 b5 bb a1 24 8b 00 1c 1b d9 d1 cd 16 3f 7b a5 94 29 63 27 4d e9 6e dc 73 fa b6 60 f5 bd e8 3b 0c ae 3b 18 2b 2a 1a 42 0c 8f e0 03 e6 d0 ef fb c4 4c b9 ee 11 41 eb eb 77 92 03 8e				
OCSP					
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:28:16 - 31/03/25 15:28:16				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.24.f5				
TSP					
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:28:16 - 31/03/25 15:28:16				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	242622239				
Datos estampillados:	3b9P9/PPtTRCxbToQK9IkVg3v7Y=				



FIRMANTE				
Nombre:	JORGE MASON CAL Y MAYOR	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.de.ef	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:34:29 - 31/03/25 15:34:29	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	7f 97 5f 62 ff 38 7d 5c d2 ba c3 51 1c 33 6a ca 5f 0b fa 57 93 28 4f 92 e5 94 52 fd 1d 05 bf ab 4b 35 63 1b 00 78 d3 30 bf 2d 73 ba c9 1c 6f 76 a1 8e 59 00 0f fc 05 d5 56 98 0f 96 0c 3e 57 b4 7e 9c f8 cc df 43 01 3e 7b 05 e6 0d 73 eb 80 b4 ac a0 cf a4 ab 86 49 92 0a 3a 85 82 39 ca 6e 67 a8 45 2e 73 6a e1 0d d2 b0 0c bc 63 ee 17 b8 83 11 12 ec 44 be 9a 26 ae 5a 3d f6 e8 40 48 ef c2 c2 d9 89 44 90 02 22 56 59 a2 cb 30 32 22 c5 81 1f 1b 4d 16 2e eb b7 26 18 e8 d8 4e 32 f6 80 b3 ba 65 1a cd 1d d5 ee 7a 2c d2 ec 94 88 20 06 34 8f cd ce 7c 77 e4 c3 cb e8 f7 25 3f 50 3c bd b7 3f 7a 78 aa 2c 56 6e 8f 1e a2 0e c8 94 8d de 39 41 e3 9d f8 f8 48 29 67 94 36 af 70 25 21 8a f2 aa 42 d7 57 63 bd 57 17 bc 69 e1 8d 88 50 33 8e 59 7d 5e 89 16 83 07 44 79 1b 42 bd 79 0a fd 21			
OCSF				
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:34:29 - 31/03/25 15:34:29			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.de.ef			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:34:30 - 31/03/25 15:34:30			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	242629175			
Datos estampillados:	rs9z2k8ed5xgy/hjhlVGihP8G80=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN MANUEL MORAN RODRIGUEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.36.9a	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:42:58 - 31/03/25 15:42:58	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	32 a8 88 0d 8e 1f af 08 9b ab 92 bb 21 83 3b a6 05 cc ee b6 7c 11 e4 65 c1 07 84 79 ba 0f 69 58 5d 0b 3f f7 4a 3e db 71 08 1e c4 6f a0 b0 8b 4d b0 7f f6 74 86 67 e2 bf 61 13 cc bb 32 59 1a 1c 95 a1 12 7b 02 58 99 a5 a6 20 67 0b 7d c5 a9 cf 7f b7 21 fa 16 3c c3 39 b0 92 29 65 22 b9 bf d6 3f d6 61 45 95 83 9e ca 68 6d c8 8a 59 5c dd cc 4e d3 21 b6 46 a2 2e 0d 7d 49 84 2d 5b 1c 7e fd 5f f4 fd eb 4a 91 7e 5e ef 95 2f 33 df 9d ba b2 4d 8f 5a 17 77 04 95 75 4d 59 67 aa 74 01 a8 91 88 87 48 84 b3 9b 2a 7a d1 c2 9f ac 14 f5 20 b9 e4 2f a2 60 4d 51 a4 9c 8d ed a9 aa 6b 76 69 d1 b8 0d fd 0f dd e0 eb a8 92 6d 2f b9 c4 6b 6d a7 28 42 b3 0f d7 51 ae ea f1 08 8a fb 8d c6 1f 0a 7a 31 2c b0 e1 b3 2d 45 77 a8 4e 00 f4 a0 80 d1 b9 30 84 af 27 22 83 67 3c d0 4d 34 9d 79 6d 48			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:42:58 - 31/03/25 15:42:58			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.36.9a			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/03/25 21:42:59 - 31/03/25 15:42:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	242638340			
Datos estampillados:	EG+YsLpX2XmVImpagPefMUTGR5w=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE					
Nombre:	MINERVA LÓPEZ CONSTANTINO		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.07.ac		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/03/25 22:05:12 - 31/03/25 16:05:12		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256				
Cadena de firma:	7d 95 7e 54 71 81 c3 78 33 dc a2 42 7a 74 b5 df f7 8f dd a8 39 0c b9 f4 55 2e 49 b9 8e 31 a6 16 0f d3 90 1d e4 79 97 f6 8e 1b 7f d3 3c 22 cd 00 78 44 e9 ab 98 f5 3a 40 31 23 e1 ae 42 0d b0 be 7f ee b2 b9 c8 b8 1d 3a e5 df 99 a4 b4 4f d6 f2 64 cb be 38 e1 c8 42 09 80 a2 90 0b 91 58 98 c2 46 dc fb 57 9d 99 69 2b 6e 33 63 de f4 b3 b4 4a 7b 5a 46 23 a9 9d ec 64 79 c2 62 55 59 92 42 66 c9 0e 92 3e 51 05 67 0e 2f d5 d8 2e a0 67 3e a2 c9 64 ec 7b eb d5 2f d0 9b 96 0f 89 0f 7e 91 76 b1 be fe a8 87 d6 1c 9f 1b 77 62 2b 32 8f 43 82 90 02 89 44 9c ab e2 fd c7 78 e5 66 cf 2a 96 77 af c7 62 18 db 66 05 15 46 fd f5 3f 0a f7 1a a7 19 5d ca 53 80 9b 69 10 32 2b 5d 05 4e 3f 68 3f 37 b5 be 9c 21 32 56 50 2c 9d e4 1b 12 5e 82 f1 2b 6f c4 29 88 d0 b0 26 6d 19 cd 7e cd aa bd f9				
OCSP					
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/03/25 22:05:13 - 31/03/25 16:05:13				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.07.ac				
TSP					
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/03/25 22:05:13 - 31/03/25 16:05:13				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	242660404				
Datos estampillados:	INmg2PhWYN2OLJsc/HxALLGVH5w=				

El treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, el licenciado Salomón Zenteno Urbina, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.